

GUATEMALA: INFORME DE LOS DERECHOS HUMANOS 2014

RESUMEN

Guatemala es una república constitucional multipartidista. En 2011 Otto Pérez Molina, del Partido Patriota, ganó las elecciones presidenciales para un período de cuatro años que comenzó en enero de 2012. A juicio de los observadores internacionales las elecciones fueron, generalmente, libres y justas. En algunas ocasiones, las autoridades no mantuvieron un control efectivo sobre las fuerzas de seguridad; la disciplina interna siguió siendo problemática.

Los principales abusos de derechos humanos incluyeron corrupción institucional generalizada, en particular, en los sectores judicial y policial; participación de las fuerzas militares y policiales en delitos graves, como secuestros, tráfico de estupefacientes, trata de personas y extorsión; y violencia social, que a veces llegó a ser letal contra las mujeres.

Otros problemas de derechos humanos incluyeron abusos y malos tratos por miembros de la Policía Nacional Civil (PNC); condiciones penitenciarias duras y que ponían en peligro la vida; detenciones y arrestos arbitrarios; prisión preventiva prolongada; abstención por parte del régimen judicial de llevar a cabo investigaciones exhaustivas y prontas y juicios justos; y falta de protección a funcionarios judiciales, testigos y representantes de la sociedad civil contra intimidaciones y amenazas. También hubo asesinatos de periodistas, activistas de derechos humanos y sindicalistas; acoso sexual y discriminación contra mujeres; abuso de menores, entre ellos, su explotación sexual con fines comerciales; discriminación y abusos de personas con discapacidades; y trata y contrabando de personas, incluso de niños no acompañados. Otros problemas incluyeron la marginalización de comunidades indígenas y la aplicación de mecanismos ineficaces para dirimir conflictos de tierras; discriminación por motivo de orientación sexual e identidad de género; y aplicación ineficaz de las leyes laborales y sobre el trabajo de menores.

El gobierno cooperó con la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), respaldada por las Naciones Unidas, y adoptó medidas para enjuiciar a funcionarios responsables de los abusos. No obstante, perduró la impunidad generalizada.

Numerosos actos de violencia fueron cometidos por pandillas, la delincuencia organizada y organizaciones de tráfico de estupefacientes; desdichadamente, la

corrupción y las investigaciones y los enjuiciamientos deficientes de dichos delitos dificultaron la atribución de responsabilidades.

Sección 1. Respeto de la integridad de la persona, incluido el derecho a no verse sometida a:

a. Privación arbitraria o ilícita de la vida

Al 30 de septiembre, la PNC y su Oficina de Responsabilidad Profesional (ORP), órgano de investigación de los abusos atribuidos a las fuerzas de seguridad, acusó de homicidio a nueve agentes de la PNC. El caso estaba pendiente de juicio.

El 6 de junio, un tribunal suizo declaró culpable al antiguo jefe de la PNC Erwin Sperinsen y le condenó a reclusión perpetua por la ejecución extrajudicial de un recluso y complicidad en la ejecución extrajudicial de otros seis reclusos durante la Operación Pavo Real, que se llevó a cabo en 2006 en la prisión de Pavón. Sperinsen, poseedor de la doble nacionalidad guatemalteca y suiza, huyó a Suiza para evitar ser enjuiciado en Guatemala.

En 2013, un tribunal integrado por tres jueces declaró al antiguo jefe de Estado Efraín Ríos Montt culpable de genocidio y crímenes de lesa humanidad y le impuso una pena de 80 años de prisión. Más tarde, el mismo año, el Tribunal Constitucional revocó la sentencia por motivos de procedimiento y remitió la causa a otro tribunal para su revisión. Al fin del año, no se había reanudado el juicio.

Según el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, en los nueve primeros meses del año se denunciaron 4.156 homicidios en el país, frente a 4.707 durante el mismo período de 2013, lo que supone una disminución del 12%.

El gobierno llegó a un acuerdo para resolver un contencioso de más de 30 años con comunidades afectadas por la construcción de la presa hidroeléctrica Chixoy. Durante la construcción de la presa (1975-85), más de 400 personas resultaron muertas y millares más fueron desplazadas. El acuerdo preveía el pago por el gobierno de 156 millones por concepto de reparación a comunidades e individuos damnificados.

b. Desaparición

No se denunciaron nuevas desapariciones por motivos políticos. El gobierno adoptó medidas para investigar y llevar a los tribunales casos de desapariciones

forzosas del período del conflicto armado interno (1960-96). El 23 de junio las autoridades arrestaron a los oficiales del ejército jubilados Esteelmer Reyes y Heriberto Valdez, a los que acusó de la comisión de asesinato, desapariciones forzosas y abusos sexuales cuando estaban a cargo del cuartel militar de Sepur Zarco (1982-83), en el departamento de Izabal, al norte del país.

c. Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes

Si bien la Constitución y las leyes prohíben la tortura y otros tratos o castigos crueles, inhumanos, o degradantes, se recibieron denuncias verosímiles de abusos y otros malos tratos a manos de miembros de la PNC.

El 19 de junio, un tribunal declaró culpables y condenó a 33 años de reclusión a los agentes de policía Myder Roblero Vásquez, José Oswaldo Can Chanchavac, Yacson Yaser Mazariegos Barrios, Jimmy Hans López Morales y María del Carmen Soto López por el secuestro y la desaparición, en 2008, de Nancy Gabriela Aguilar Joachin.

Condiciones en las cárceles y los centros de detención

Las duras condiciones reinantes en las cárceles ponían en peligro la vida, y se registraron numerosos casos de asesinatos entre los mismos reclusos. Ninguno de los casos fue investigado ni se llevó a juicio. Los ataques sexuales, la falta de saneamiento y atención médica adecuados, así como el craso hacinamiento siguieron poniendo en grave riesgo a los reclusos.

Condiciones físicas: El hacinamiento en las prisiones siguió siendo un problema. Según el registro del régimen penitenciario, al 30 de septiembre el número de reclusos ascendió a 18.379, entre los cuales figuraban 1.644 mujeres, en instalaciones diseñadas para albergar a 6.742 personas. El número de jóvenes bajo la custodia de la Secretaría de Bienestar Social ascendió a 1.099.

Las condiciones físicas se caracterizaron por la deficiencia de instalaciones de saneamiento e higiene, y de servicios de atención médica y odontológica, ventilación, control de temperatura y alumbrado. Los reclusos tuvieron difícil acceso a agua potable, se quejaron de la comida inadecuada y con frecuencia tuvieron que pagar por alimentos adicionales. La venta y el consumo de drogas ilícitas siguieron siendo generalizados. Los oficiales de prisiones continuaron denunciando la falta de seguridad y control, incluso intentos de fuga, peleas entre pandillas, la incapacidad de controlar el contrabando de bienes dentro de los

centros penitenciarios, y la fabricación de armas. Los presos siguieron realizando actividades delictivas dentro y fuera de las cárceles. Los guardias de prisiones no controlaron eficazmente a los presos.

Según datos del régimen penitenciario, desde enero hasta el 25 de noviembre, de un total de 57 defunciones registradas en las cárceles, cinco se debieron a causas no naturales.

Las condiciones de las poblaciones penitenciarias masculina y femenina fueron, generalmente comparables en todo el país. Los medios de información y las organizaciones no gubernamentales (ONG) señalaron los continuos abusos sexuales a los que se enfrentaban las mujeres y los jóvenes reclusos. Las reclusas denunciaron registros corporales innecesarios y abusos verbales por parte de los guardias penitenciarios. Los niños menores de tres años podían vivir en la cárcel con sus respectivas madres, aunque el régimen penitenciario proporcionaba alimentos inapropiados para los niños de corta edad y muchos de ellos padecían enfermedades. Grupos para la defensa de los derechos de lesbianas, gays, bisexuales y transexuales (LGBT) denunciaron frecuentes asaltos contra gays y transexuales por otros reclusos, así como la falta de instalaciones y protocolos suficientes para proteger a los reclusos LGBT.

En algunas ocasiones, las autoridades mantuvieron a hombres y mujeres detenidos juntos en instalaciones de inmigración, a detenidos en régimen de prisión preventiva con presos convictos, y a jóvenes con adultos.

Administración: El defensor gubernamental independiente de los derechos humanos, encargado, entre otras cosas, de los derechos de los presos, no estaba autorizado para actuar en nombre de presos y detenidos en relación con opciones a la encarcelación de los delincuentes no violentos, las circunstancias de la reclusión de los delincuentes jóvenes o la introducción de mejoras procesales para asegurar que los presos no tuvieran que cumplir sentencias más prolongadas que la máxima correspondiente al delito que se les imputaba. Los registros penales seguían siendo inadecuados.

Presos y detenidos tuvieron acceso razonable a visitantes y pudieron observar sus prácticas religiosas. Si bien las autoridades están obligadas por ley a permitir a los presos y los detenidos presentar denuncias a las autoridades judiciales sin previa censura y solicitar la investigación de alegaciones verosímiles de condiciones inhumanas, no investigaron la mayor parte de las alegaciones de condiciones y

trato inhumanos ni documentaron los resultados de dichas investigaciones en una forma públicamente accesible.

Vigilancia independiente: El gobierno permitió las visitas de grupos internacionales y locales de defensa de los derechos humanos, la Organización de los Estados Americanos (OEA), los defensores públicos y las agrupaciones religiosas.

d. Arresto o detención arbitrarios

La Constitución y las leyes prohíben el arresto y la detención arbitrarios, pero hubo informes verosímiles de arrestos extrajudiciales, detenciones ilícitas y denegación de acceso oportuno a un juez y a ser oído ante un tribunal competente, como dispone la ley.

Función de la policía y del aparato de seguridad

La PNC, bajo la supervisión del Ministerio de Gobernación y dirigida por un director general nombrado por el Ministerio, está encargada de velar por el cumplimiento de la ley y mantener el orden en el país. El Ministerio de Defensa Nacional tiene a su cargo las fuerzas militares, cuya misión principal es la defensa del país; no obstante, el gobierno también utilizó al ejército en operaciones de seguridad interna y de policía.

Las autoridades civiles no siempre ejercieron un control eficaz sobre la PNC y el gobierno no dispuso de mecanismos eficaces para investigar y castigar los abusos y la corrupción. Hubo informes de casos de impunidad en los que estaban involucradas las fuerzas de seguridad. La PNC siguió adoleciendo de falta de personal, personal insuficientemente capacitado y financiado, todo lo cual afectó considerablemente su rendimiento.

Las fuerzas de seguridad acusadas de cometer crímenes disfrutaron de un alto grado de impunidad. La investigación interna de los casos en los que estaban implicadas las fuerzas de policía correspondió a la Oficina de Responsabilidad Profesional (ORP), mientras que la investigación externa fue de incumbencia del Ministerio Público. Para reformar las fuerzas policiales se estableció, durante el gobierno anterior, una Comisión Nacional de la Reforma Policial, cuya misión consiste en efectuar los cambios necesarios.

Circularon informes de casos de extorsión y malos tratos por parte de agentes de policía y de inmigración, de los que fueron víctima personas que trataron de entrar en el país ilícitamente. La PNC trasladó habitualmente a los agentes sospechosos de mala conducta, en lugar de investigarlos y castigarlos.

Se acusó a la policía de efectuar detenciones indiscriminadas e ilícitas como parte de sus operaciones contra las pandillas, en algunos barrios de alto índice de criminalidad. Se dijo que agentes de seguridad arrestaron y encarcelaron a personas sospechosas de pertenecer a pandillas sin mandamientos judiciales o alegando cargos falsos de delitos relacionados con drogas. Según informes de prensa, la policía participó en secuestros para pedir rescate.

La ORP llevó a cabo investigaciones internas de mala conducta de agentes de policía. Durante los nueve primeros meses del año, la ORP informó haber recibido 1.104 denuncias de mala conducta de personal policial.

Todos los nuevos reclutas de la PNC y de las fuerzas militares reciben alguna forma de capacitación en ética profesional y derechos humanos. No se facilitó información adicional sobre el contenido de dicha capacitación ni el número de horas que se le dedicaron, pese a las solicitudes cursadas en ese sentido.

Procedimientos de arresto y trato durante la detención

La ley exige la presentación de un mandamiento judicial a un sospechoso antes de efectuar su arresto, salvo cuando la policía le sorprenda en el acto de cometer un delito. La policía no puede detener a un sospechoso por más de seis horas sin someter el caso ante un juez. Las autoridades no respetaron regularmente este derecho y no informaron a algunos detenidos de los cargos que pesaban sobre ellos. Tras la instrucción de cargos, el fiscal suele disponer de tres meses para concluir la investigación y entablar causa ante un tribunal o solicitar una prórroga oficial del plazo de detención. Está legalmente prohibida la ejecución de un mandamiento de allanamiento entre las 6 de la tarde y las 6 de la mañana, a menos que el gobierno haya decretado el estado de sitio. La ley prevé el acceso a abogados y la fianza en la mayoría de los delitos. El gobierno también facilita asistencia letrada a los detenidos indigentes y los detenidos tienen acceso a sus familiares. El juez puede, a su discreción, decidir la necesidad o permisibilidad de la fianza en casos de detención preventiva.

Arresto arbitrario: No se dispuso de datos fidedignos sobre el número de detenciones arbitrarias, aunque la mayoría de las informaciones indican que la

policía siguió haciendo caso omiso de los autos de hábeas corpus en casos de detención ilícita, en particular, en el curso de operaciones contra pandillas en los barrios.

Detención preventiva: Según los registros penitenciarios, al 1 de agosto, 49% de los reclusos estaban en régimen de detención preventiva. La ley establece un límite de tres meses a la detención preventiva, pero las autoridades retuvieron regularmente a los detenidos después de la fecha fijada para su comparecencia ante los tribunales o su puesta en libertad. Las prolijas investigaciones y las frecuentes mociones de procedimiento presentadas, tanto por la defensa, como por el ministerio fiscal, en muchas ocasiones retrasaron los juicios meses o años. Las autoridades no pusieron en libertad oportunamente a algunos reclusos después de cumplir plenamente sus sentencias, debido a que los jueces no expidieron los mandamientos necesarios o por otras trabas burocráticas.

El 10 de junio, la policía arrestó a los agentes de la PNC Matías de León, Matías de Jesús Caal, Orlando Israel Gamarro Gamarro y Carlos Álvarez por violación de una menor el 1 de junio, cuando estaba en régimen de detención preventiva en un calabozo de la policía en Chicamán, Departamento de El Quiché. Todavía estaba pendiente la audiencia para el juicio.

e. Denegación de juicio público imparcial

La Constitución y las leyes establecen un poder judicial independiente. El sistema judicial no hizo posible la celebración de juicios justos u oportunos por ineficacia, corrupción, falta de personal e intimidación de jueces, fiscales y testigos.

Jueces, fiscales, demandantes y testigos continuaron denunciando amenazas, intimidación y vigilancia, sobre todo por parte de las organizaciones de narcotraficantes. Para fines de septiembre, el fiscal especial para delitos contra funcionarios de los órganos judiciales había recibido 171 denuncias de amenazas o agresión contra ese personal, frente a 213 en todo el año de 2013.

La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) presta asistencia al Ministerio de Gobernación y al Ministerio Público en la investigación de casos. La CICIG afirmó haber participado en la investigación de 57 casos de gran resonancia, sobre cuestiones tales como ejecuciones extrajudiciales, extorsión, trata de personas, adopciones indebidas, corrupción y tráfico de drogas.

La Corte Suprema continuó tratando de asegurar la suspensión de jueces y llevando a cabo investigaciones criminales de conducta indecorosa o irregularidades en casos bajo su jurisdicción. Para finales de octubre, la dependencia disciplinaria del Poder Judicial había investigado 548 denuncias de acciones ilegales, celebrado juicios derivados de 479 denuncias e impuesto sanciones en varios casos, que iban de avisos por escrito a 30 días de suspensión.

Procedimientos judiciales

La Constitución prevé el derecho a un juicio público justo, la presunción de inocencia, el derecho a comparecer en juicio y el derecho a asistencia letrada oportuna. La ley exige que se facilite asistencia letrada, a cargo del gobierno, a los encausados sobre los que pesan cargos criminales y no pueden conseguir abogado o costear sus honorarios. Los acusados y sus abogados tienen acceso a las pruebas en poder del fiscal pertinentes a su caso, pueden carear a los testigos de cargo y presentar sus propios testigos y pruebas. La ley prevé la negociación de cargos y condenas y el derecho de apelación. Tribunales integrados por tres jueces emiten veredictos; no existen juicios por jurado. La ley dispone la celebración de juicios orales y ordena la facilitación de servicios de interpretación a quienes los necesiten; no obstante, no siempre se dispuso de intérpretes. Los juicios se celebran en español, el idioma oficial, aunque muchos guatemaltecos hablan alguno de los 23 idiomas indígenas reconocidos oficialmente, y no español.

El Ministerio Público, en calidad de órgano semiindependiente del poder ejecutivo, puede incoar procedimientos penales a iniciativa propia o en respuesta a una demanda. Los particulares pueden participar en el enjuiciamiento de casos penales como demandantes

Presos y detenidos políticos

No hubo informes de detenidos ni presos políticos.

Procedimientos y recursos judiciales civiles

Individuos y organizaciones tuvieron acceso a recursos administrativos y judiciales para entablar demandas en busca de indemnización por daños y perjuicios por la violación o el cese de derechos humanos u otros supuestos daños. Si bien la judicatura actuó, en general, de manera imparcial e independiente en asuntos civiles, tuvo deficiencias y debilidades institucionales.

Fallos del tribunal regional de derechos humanos

El 21 de agosto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró al gobierno en desacato en las 13 sentencias dictadas entre 1999 y 2013. La Corte ordenó, entre otras cosas, la inmediata investigación, enjuiciamiento y, en su caso, la sanción por el gobierno de los responsables de las violaciones de derechos humano en los 13 casos.

f. Injerencia arbitraria en la privacidad, la familia, el hogar o la correspondencia

La Constitución y la ley prohíben dichos actos y, por lo general, el gobierno respetó esas prohibiciones.

Sección 2. Respeto de las libertades civiles, incluidas las siguientes:

a. Libertad de expresión y de prensa

La ley dispone la libertad de expresión y de prensa y, en general, el gobierno respetó esos derechos; ahora bien, la intimidación criminal de periodistas dio por resultado un considerable grado de autocensura. También se informó de la existencia de grupos anónimos que restringían la distribución de medios impresos prensa mediante la intimidación de los distribuidores o el apoderamiento de ejemplares de revistas que contenían artículos críticos del gobierno o de otros políticos.

Libertad de prensa: Pese a las leyes en apoyo de la libertad de prensa, muchos periodistas fueron víctima de amenazas, acoso y violencia. Los periodistas que informaban sobre la delincuencia organizada y sus vínculos con funcionarios públicos corruptos admitieron haberse autocensurado, conscientes del peligro que el periodismo de investigación suponía para ellos y su familia. Los medios de información independientes se mantuvieron activos y expresaron una amplia variedad de opiniones, pero la dificultad de obtener licencias para poner en servicio emisoras de radio comunitarias y acceder a determinados tipos de información limitó la libertad de prensa.

Violencia y acoso: Miembros de la prensa continuaron denunciando el entorpecimiento del ejercicio del periodismo libre y abierto por la violencia y la impunidad continuas. La prensa informó de numerosas amenazas proferidas por

funcionarios públicos y organizaciones delictivas, que intensificaron la sensación de vulnerabilidad de los periodistas.

Según el Ministerio Público, para fines de noviembre se habían recibido 77 denuncias de ataques o amenazas a periodistas y ninguna denuncia de asesinato, frente a 64 denuncias y cuatro asesinatos durante todo el año 2013. El Ministerio Público dispone de una dependencia dedicada a la investigación de amenazas y ataques a periodistas.

Censura o restricción del contenido: Algunos miembros de la prensa declararon haber sido objeto de presiones, amenazas y represalias de diversos funcionarios públicos por la selección y el contenido de sus reportajes. Algunos propietarios y miembros de medios de información también acusaron al gobierno de adoptar una norma de publicidad discriminatoria, que sancionaba o recompensaba a los medios de comunicación impresos y audiovisuales según interpretase las noticias o los comentarios como favorables o críticos de su gestión.

El 26 de junio, el diario Prensa Libre acusó al gobierno de Pérez Molina de presionarle para obligarle a poner fin a la publicación de reportajes críticos del gobierno y a publicar informaciones favorables.

En el curso del año, José Rubén Zamora, director de El Periódico, alegó que el gobierno trató de forzar la clausura de su periódico mediante la retirada de los anuncios oficiales y la imposición de un boicoteo de hecho, aunque no declarado, por los anunciantes del sector privado, porque el periódico criticaba al gobierno. Zamora fue objeto de docenas de pleitos por difamación entablados en nombre de altos funcionarios del gobierno. En algunos casos, se desistió del pleito y en otros todavía no se ha señalado fecha para la vista.

Impacto no gubernamental: La delincuencia organizada influyó en los medios de difusión y en los informadores, con sus frecuentes amenazas a individuos por difundir información sobre actividades criminales y advertencias a los periodistas de que no escribiesen o publicasen informes sobre delitos.

Libertad de acceso a internet

El gobierno no restringió ni puso trabas al acceso a internet, ni censuró contenido en línea, y no se recibieron informes verosímiles de vigilancia gubernamental de comunicaciones privadas sin la debida autorización legal. Según la Unión

Internacional de Telecomunicaciones, 20% de la población utilizó internet, frente a 16% en 2012.

Libertad académica y actos culturales

El gobierno no impuso restricciones a la libertad académica ni a la celebración de actos culturales.

c. Libertad de reunión y de asociación pacíficas

La libertad de reunión y asociación pacíficas está consagrada en la Constitución y el gobierno, en general, respetó estos derechos; no obstante, se recibieron informes de uso excesivo de la fuerza por las fuerzas de seguridad contra algunas manifestaciones.

Libertad de reunión

El 23 de mayo, estalló la violencia en la Mina El Tambor, cerca de las ciudades de San José de Golfo y San Pedro Ayampuc, en el Departamento de Guatemala, cuando las fuerzas de seguridad trataban de permitir la entrada de material y equipo de minería en el lugar. Según informes facilitados por los miembros del primer equipo de salvamento que acudió al lugar de los hechos, la explosión de unos cartuchos de gas causó heridas a 15 manifestantes. La policía, al parecer, lanzó los cartuchos directamente a los manifestantes, en vez de dirigirlos hacia el suelo. Varios manifestantes resultaron gravemente heridos. Trece agentes de policía resultaron heridos cuando fueron apedreados por los manifestantes.

El 22 de septiembre, el gobierno decretó 30 días de “estado de sitio”, por el que se limitaron determinados derechos, entre ellos, el derecho de reunión, en el municipio de San Juan Sacatepéquez, después de un estallido de violencia entre miembros de la comunidad que se saldó con la muerte de ocho personas, cinco de ellas miembros de una misma familia. La violencia tuvo su origen en diferencias surgidas entre miembros de la comunidad en torno a la venta de una finca relacionada con un proyecto de construcción de una carretera. Las comunidades habían estado en pugna durante varios años a causa de la construcción de una fábrica de cemento en la región. Se informó de la presencia de grupos armados enviados a la región durante los disturbios sociales.

Libertad de asociación

La ley prevé la libertad de asociación y el gobierno, en general, respetó ese derecho; no obstante, se levantaron considerables obstáculos a la organización en el sector laboral (véase la sección 7.a.).

c. La libertad de religión

Véase el Informe del Departamento de Estado sobre la libertad religiosa internacional (*International Religious Freedom Report*) en www.state.gov/religiousfreedomreport/.

d. Libertad de circulación, desplazados internos, protección de refugiados y apátridas

La Constitución y la ley permiten la libertad de circulación dentro del país, los viajes al extranjero, la emigración y la repatriación y, en general, el gobierno respetó estos derechos.

Protección de los refugiados

Acceso a asilo: Las leyes del país prevén la concesión de asilo o la condición de refugiado, y el gobierno ha establecido un sistema para proteger a los refugiados.

Sección 3. Respeto de los derechos políticos: El derecho de los ciudadanos a cambiar de gobierno.

La Constitución prevé el derecho de los ciudadanos a cambiar de gobierno mediante elecciones libres y justas, derecho que se ejerció mediante el sufragio casi universal de la población mayor de 18 años. Los miembros de las fuerzas armadas, la policía y los encarcelados no tienen derecho a votar y tampoco se permite el voto en ausencia.

Las elecciones y la participación política

Elecciones recientes: En 2011 Otto Pérez Molina, del Partido Patriota, ganó las elecciones a la presidencia para un período de cuatro años. Según la misión de observación de la OEA las elecciones fueron generalmente libres y justas.

Participación de la mujer y de las minorías: La vicepresidencia estuvo desempeñada por Roxana Baldetti, primera mujer que ocupó este cargo. De los 158 escaños del Congreso, 21 estaban ocupados por mujeres. De los 918 jueces o

magistrados, 339 eran mujeres, entre ellas, una en la Corte Suprema y otra en la Corte de Constitucionalidad. Además de la vicepresidenta, dos de los 14 miembros del gabinete eran mujeres. De los 333 alcaldes del país, cinco eran mujeres.

Aunque, según datos del censo oficial, el 44% de la población estaba integrada por indígenas, su representación en el gobierno nacional era mínima. Ningún indígena formaba parte del gabinete ni de la Corte de Constitucionalidad. El presidente de la Corte Suprema era el único indígena de los 13 magistrados de esta institución. El Congreso contaba con 20 indígenas entre sus miembros. Los gobiernos locales estaban integrados en su mayoría por indígenas, 113 de los cuales desempeñaban el cargo de alcalde.

Sección 4. Corrupción y falta de transparencia en el gobierno

La ley dispone la imposición de sanciones penales por corrupción de funcionarios públicos, pero éstos participaban con frecuencia en prácticas corruptas con impunidad. Al igual que en años anteriores, la falta de voluntad política y la impunidad generalizada propiciaron la corrupción gubernamental.

Corrupción: El 3 de junio, las autoridades arrestaron al antiguo alcalde de San Miguel Petapa, Rafael Eduardo González Rosales, y a otras cinco personas por fraude y blanqueo de dinero, concretamente, de 34 millones de quetzales (\$4,4 millones) de fondos municipales. La causa contra González y los otros cinco acusados fue declarada sin lugar en octubre, decisión que fue criticada por organizaciones de la sociedad civil. De manera similar, en octubre, un juez desestimó la causa entablada contra el alcalde de Chinautla Arnoldo Medrano, decisión criticada por organizaciones defensoras del estado de derecho.

Se registraron numerosos casos de corrupción en la policía, la judicatura y el régimen penitenciario. El 9 de octubre, la CICIG solicitó una investigación oficial del magistrado de la Corte Suprema Erick Gustavo Santiago de León y dos coconspiradores, Eliot Imeri Díaz y Samuel Enrique Alvarado, por solicitar un soborno de dos millones de dólares para reducir una multa impuesta a una empresa privada por un tribunal inferior.

El 3 de septiembre, una investigación penal llevada a cabo por la CICIG reveló que las autoridades penitenciarias recibían sobornos para trasladar a los reclusos de una cárcel a otra. El director de prisiones Edgar Josué Camargo Liere, el director adjunto Edy Fisher Arbizú, el recluso Byron Lima Oliva y cinco cómplices (Carnos Cermeno Espina, José René Ávila Mazariegos, Martín Arévalo Godoy,

Alejandra Sarai Reyes Ochoa y Christian René Picón Cifuentes) fueron acusados, entre otros delitos, de asociación ilícita y conspiración para blanquear dinero, después de que una investigación de la CICIG reveló que las autoridades penitenciarias recibían sobornos para trasladar a reclusos de una cárcel a otra.

La Contraloría General de Cuentas y el Ministerio Público son los responsables de luchar contra la corrupción. El contralor general está encargado de vigilar el gasto público y al fiscal general le corresponde juzgar los delitos. Ambas agencias colaboraron activamente con la sociedad civil y fueron relativamente independientes; ahora bien, no dispusieron de recursos suficientes, lo que afectó el cumplimiento de sus respectivos cometidos. No se progresó en el enjuiciamiento de casos de corrupción oficial.

Divulgación de información financiera: Los funcionarios públicos que perciben ingresos superiores a 8.000 quetzales (\$1.040) al mes o administran fondos públicos están sujetos a las leyes de declaración de la situación financiera que supervisa y aplica la Contraloría General. Las declaraciones financieras estuvieron a disposición del público, previa solicitud. La declaración financiera inadecuada o fraudulenta de activos está sujeta a sanciones administrativas y penales.

Acceso público a la información: La ley dispone el derecho de los ciudadanos a acceder a la información pública e impone multas a las dependencias gubernamentales que obstruyen dicho acceso. La ley de declaración prevé excepciones por razones de seguridad nacional, establece plazos razonablemente breves para la declaración y permite el cobro de una tarifa razonable de tramitación. No se prevén sanciones por incumplimiento. El gobierno permitió el acceso a información pública a ciudadanos y no ciudadanos, incluidos los medios de comunicación extranjeros, aunque, en algunas ocasiones, dicho acceso fue lento e incompleto. Si bien no existe un mecanismo oficial para apelar la denegación de solicitudes, los peticionarios solicitaron asistencia, frecuentemente con éxito, a la Procuraduría de los Derechos Humanos en casos de denegación gubernamental de acceso a información pública.

Sección 5. Actitud del gobierno frente a la investigación internacional y no gubernamental de supuestas violaciones de los derechos humanos.

Diversos grupos nacionales e internacionales de derechos humanos llevaron a cabo sus actividades, investigaron y publicaron sus conclusiones sobre los derechos humanos, en general, sin restricciones gubernamentales. En algunos casos, contaron con la cooperación de funcionarios públicos. A raíz de los

enfrentamientos entre manifestantes y la policía que se produjeron después de que las autoridades intentaran despejar la carretera y la entrada a la Mina El Tambor, el 23 de mayo, el Ministerio de Gobernación anunció la expulsión de dos ciudadanos extranjeros de la ONG Brigadas Internacionales de la Paz, que, según informó el gobierno, habían realizado actividades violentas en contravención de los términos de sus respectivos visados. Pocos días después del anuncio y antes de que salieran los extranjeros del país, el Ministerio de Gobernación se retractó y canceló la orden de expulsión.

Una serie de ONG, trabajadores en defensa de los derechos humanos y sindicalistas denunciaron amenazas, actos de violencia e intimidación por personas no identificadas. Las ONG afirmaron que el gobierno hizo poco por investigar esas denuncias o impedir nuevos incidentes. Las ONG también informaron que el gobierno había amenazado con recurrir a la acción judicial como medio de intimidación.

La mayoría de los casos sometidos a la Procuraduría Especial de los Derechos Humanos no se investigaron oportunamente o languidecieron en los tribunales.

La ONG Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de Guatemala (UDEFEH) informó que para finales de octubre siete defensores de los derechos humanos habían sido asesinados, frente a 18 en 2013. UDEFEH informó asimismo que, también para finales de octubre, se registraron 791 ataques contra defensores de los derechos humanos, frente a 657 en 2013. Según varios informes por países sobre las prácticas de derechos humanos correspondientes a 2014, muchos de los ataques tenían su origen en conflictos por tierras, la explotación de recursos naturales y los procesos judiciales contra Ríos Montt.

Órganos gubernamentales de derechos humanos: La Procuraduría de los Derechos Humanos monitorea los derechos humanos establecidos en la Constitución y rinde cuenta de su gestión al Congreso. El Defensor llevó a cabo sus actividades sin injerencias gubernamentales ni partidistas, contó con la cooperación del gobierno, formuló recomendaciones y publicó informes, entre otros, un informe anual sobre el desempeño de su labor. La Procuraduría no contó con recursos suficientes.

La Comisión Presidencial de Derechos Humanos (COPREDEH) está encargada de formular y promover la política de derechos humanos del gobierno. También coordinó la protección policial de varios activistas laborales y de derechos humanos. La COPREDEH contó con la cooperación del gobierno y no estuvo

sujeta a injerencias políticas ni partidistas. Los recursos asignados a la Comisión fueron insuficientes, no obstante, se la consideró razonablemente eficaz y gozó de la confianza del público.

La Comisión de Derechos Humanos del Congreso redacta leyes sobre derechos humanos y ofrece asesoramiento en cuestiones afines. Todos los partidos políticos representados en el Congreso están obligados por ley a tener un representante en la Comisión. Las ONG informaron que consideraban a la Comisión un foro público eficaz para promover y proteger los derechos humanos.

Sección 6. Discriminación, abusos sociales y trata de personas

La Constitución y la ley prohíben la discriminación por motivo de raza, género, discapacidad, idioma o condición social. El gobierno con frecuencia no aplicó estas disposiciones y no hubo protección contra la discriminación por orientación sexual o identidad de género.

Mujeres

Violación y violencia doméstica: La violación, incluso la violación conyugal, está tipificada como delito y sujeta a penas que oscilan entre cinco y 50 años de prisión. La policía recibe un mínimo de formación y medios para investigar delitos o ayudar a las víctimas, y el gobierno no aplicó la ley de manera eficaz. La investigación y el procesamiento de casos de violación y violencia doméstica solían durar un año. Los responsables de las agresiones siguieron disfrutando de un alto grado de impunidad. La falta de confianza en el sistema judicial, el estigma social y el temor a las represalias impidieron a muchas mujeres, víctimas de violación, denunciar los delitos.

La violación y otros delitos sexuales siguieron siendo problemas graves. Según el Ministerio Público, al mes de octubre se habían denunciado 8.871 casos de agresión física o sexual. Durante ese mismo período, se dictaron 304 condenas por haber agredido física o sexualmente a las mujeres.

El gobierno tomó medidas para combatir el femicidio y la violencia contra la mujer. Mantuvo la Unidad Especial de Delitos Sexuales establecida por la PNC, la Oficina de Atención a la Víctima, la Fiscalía de Delitos contra la Mujer y una unidad especial de investigación de la trata de personas y las adopciones ilegales adscrita a la Fiscalía contra el Crimen Organizado. La Corte Suprema de Justicia y el Ministerio Público mantuvieron un tribunal abierto 24 horas diarias para prestar

servicios relacionados con la violencia contra la mujer, como la agresión y explotación sexuales y la trata de mujeres y niños.

La ley castiga con penas de cinco a ocho años los actos de violencia física, económica y psicológica contra la mujer por motivo de género. La violencia contra la mujer, incluida la violencia en el hogar, siguió siendo un problema grave. La ley prohíbe los malos tratos en el hogar, permite la expedición de órdenes de alejamiento contra los presuntos agresores y la protección policial de las víctimas y ordena la intervención de la PNC en las situaciones de violencia en el hogar. No obstante, la PNC con frecuencia no respondió a las solicitudes de ayuda en casos de violencia doméstica, y los defensores de los derechos de la mujer informaron que sólo un reducido número de agentes había recibido capacitación para responder a la violencia en el hogar o ayudar a las víctimas.

El femicidio afectó tanto a las mujeres como a las niñas y siguió siendo motivo de grave preocupación. En la mayoría de las víctimas se observaron señales evidentes de agresión sexual, tortura o mutilación. El organismo nacional de ciencias forenses de Guatemala informó que para fines de septiembre se habían registrado 559 muertes violentas de mujeres, frente a 590 en 2013. Solo de 1 a 2% de los casos juzgados por femicidio concluyeron con la imposición de sentencias condenatorias. Las ONG señalaron que la severidad de la pena no siempre correspondía a la gravedad del delito.

El Instituto de la Defensa Pública Penal prestó asistencia jurídica, médica y psicológica gratuita a las víctimas de la violencia en el hogar.

El Programa de Prevención y Erradicación de la Violencia Intrafamiliar del gobierno, adscrito a la Secretaría de Obras Sociales, informó que se estaban recibiendo cinco llamadas diarias de mujeres y menores víctimas de malos tratos. El Ministerio Público declaró que, al 31 de agosto, se habían presentado 48.132 denuncias de violencia intrafamiliar de la que eran víctima mujeres y niños. El gobierno dio a conocer que, a finales de septiembre, se habían dictado 976 sentencias condenatorias en casos de violencia intrafamiliar contra mujeres y niños.

Aunque las leyes prevén la protección, incluido el albergue, de las víctimas de la violencia en el hogar, no se dispuso de instalaciones suficientes para este fin.

La Defensoría de la Mujer Indígena, de la COPREDEH, prestó servicios sociales a las víctimas de la violencia social o doméstica, coadyuvó a la mediación y

resolución de conflictos y prestó servicios jurídicos a las mujeres indígenas. Esta oficina también coordinó y promovió la actuación de las instituciones gubernamentales y las ONG para prevenir la violencia y la discriminación de las mujeres indígenas, pero careció de los recursos humanos y la capacidad logística necesarios para llevar a cabo su cometido a escala nacional. La oficina no mantuvo estadísticas sobre el número de casos registrados.

El Ministerio de Gobernación estuvo a cargo de ocho albergues para víctimas de malos tratos en los departamentos con los índices más altos de violencia en el hogar. En varias ciudades y zonas rurales se establecieron albergues financiados por el sector privado o gobiernos municipales. Muchos de ellos prestaron asistencia jurídica y psicológica y facilitaron albergue temporal.

Mutilación o ablación genital femenina: No hay leyes contra la mutilación o ablación femenina, pero no se registró ningún caso de dichas prácticas.

Acoso sexual: No existe ninguna ley que prohíba el acoso sexual y no hubo datos fidedignos de que ocurriera. Los informes de las organizaciones de derechos humanos señalaron que el acoso sexual estaba muy generalizado en todos los sectores.

Derechos reproductivos: Las parejas y los individuos tuvieron derecho a decidir el número, el espaciamiento y el momento del nacimiento de sus hijos y a veces contaron con la información y los medios para ejercerlo sin sufrir discriminación. Aunque el gobierno facilitó acceso a información sobre planificación familiar y educación sexual a través de los servicios de salud pública, la prestación de dichos servicios en zonas remotas y en lenguas indígenas fue limitada. Informes del Fondo de Población de las Naciones Unidas (FNUAP) señalaron que 34% de las mujeres casadas practicaron algún método anticonceptivo en 2012.

El acceso a la atención de salud reproductiva se vio obstaculizado por barreras culturales, geográficas y lingüísticas, que afectaron, en particular, a las mujeres indígenas de las zonas rurales. La actitud discriminatoria de los proveedores de atención de salud y la falta de servicios de salud reproductiva y materna sensibles a la cultura local disuadieron a muchas mujeres indígenas de recurrir a estos servicios. Según cálculos del FNUAP, la tasa de mortalidad materna en 2013 fue de 140 muertes por cada 100.000 nacimientos vivos. Las causas principales de mortalidad materna fueron el acceso limitado a personal sanitario calificado y, en algunos casos, atención prenatal y posnatal deficiente. Los últimos datos del FNUAP indican que en 2013 el 51% de los partos contaron con la asistencia de

personal de salud calificado. En las zonas rurales, los servicios de atención ginecológica de urgencia fueron limitados, incluso los servicios especiales para el tratamiento de complicaciones derivadas del aborto.

Discriminación: La ley establece el principio de igualdad de género y penaliza la discriminación. No obstante, las mujeres fueron objeto de discriminación, en particular, en el marco del derecho familiar y el derecho laboral, y tuvieron menos probabilidades de desempeñar cargos directivos. Las mujeres encontraron empleo, principalmente, en sectores mal remunerados, como la agricultura, el comercio minorista, los servicios, las industrias textil y de confección de prendas de vestir y el gobierno. Su trabajo se concentró, en particular, en el sector no estructurado, donde los sueldos eran, en general, más bajos y las prestaciones inexistentes. Según cálculos del informe mundial de 2014 sobre la disparidad de género (*Global Gender Gap Report 2012*), el ingreso medio de las mujeres equivalía a 58% del de los hombres, y el salario medio de las mujeres equivalía a 64% del que percibían los hombres por un trabajo similar. Por ley, las mujeres pueden ser propietarias, administrar y heredar bienes al igual que los hombres, incluso en casos de divorcio.

La Secretaría Presidencial de la Mujer asesora al presidente sobre la coordinación interinstitucional de las políticas que afectan a la mujer y su desarrollo. Varias ONG que trabajan en cuestiones de la mujer señalaron que la Secretaría se mantuvo en un discreto segundo plano y no mantuvo una relación tan activa con los miembros de la sociedad civil como la había tenido durante los gobiernos anteriores.

Menores de edad

Inscripción de nacimientos: La ciudadanía se adquiere por nacimiento en el territorio del país o a través de los padres. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) calificó el reducido número de registros de nacimientos de “problema grave”, y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados caracterizó de especialmente grave la aversión al registro de nacimientos en las comunidades indígenas, que atribuyó a sistemas oficiales de registro y de documentación inadecuados. Algunos factores, como la necesidad de viajar a zonas urbanas desconocidas, tratar con funcionarios públicos del sexo masculino no pertenecientes a comunidades indígenas y no hablar español impidieron a veces la inscripción de algunas mujeres indígenas y de sus hijos. No se permitió a los ciudadanos extranjeros residentes en el país, sin la documentación necesaria, registrar a sus hijos nacidos en el país antes de regularizar su propia

situación migratoria. A veces, el hecho de no estar inscritos limitó el acceso de los menores de edad a ciertos servicios públicos.

Educación: Si bien la educación es obligatoria hasta los 12 años, la enseñanza secundaria no lo es y las niñas tienen menos probabilidades que los niños de cursar dicho ciclo escolar. En muchas zonas rurales el acceso a la enseñanza primaria obligatoria era limitado y las organizaciones religiosas con frecuencia ayudaron a impartir educación.

Maltrato de menores: El maltrato infantil siguió siendo un problema grave. La Unidad de la Niñez y Adolescencia Víctima, de la Fiscalía de la Mujer, investigó casos de maltrato de menores e informó que, para fines de septiembre, se habían dictado 88 sentencia condenatorias en 88 de ellos.

La Secretaría de Bienestar Social, que supervisa los programas de trato, capacitación, educación especial y bienestar infantil, proporcionó albergue y asistencia a menores víctimas de maltrato, pero en ocasiones albergó a niños bajo su cuidado junto con jóvenes con antecedentes penales. El gobierno administró un albergue para niñas en Antigua, Departamento de Sacatepéquez, y otro para niños en San José Pinula, Departamento de Guatemala. Otros dos albergues, en Quetzaltenango y Zacapa, acogieron a niños y niñas. El gobierno dispone de albergues para víctimas de la trata de personas en Coatepeque, Cobán y la Ciudad de Guatemala. El gobierno continuó financiando albergues para jóvenes administrados por ONG para víctimas de malos tratos o de la trata de personas.

Matrimonio forzoso y a edad temprana: La edad legal mínima para contraer matrimonio es de 18 años. Con el consentimiento de los padres, se reduce a 16 para los niños y 14 para las niñas, pero se prevén excepciones en los casos en que las niñas tengan un hijo o estén embarazadas. Se recibieron denuncias fidedignas de matrimonios precoces forzosos en algunas comunidades rurales indígenas. La publicación El Estado Mundial de la Infancia (*State of the World's Children*) de 2012, del UNICEF, informó que 35% de las mujeres de 20 a 24 años de edad se casaron o contrajeron unión civil por primera vez a los 18 años (8% de ellas a los 15 años). No se recibieron informes de intentos del gobierno para impedir el matrimonio de menores.

Mutilación o ablación genital femenina: Ninguna ley prohíbe explícitamente la mutilación o ablación genital femenina; no obstante, las autoridades advirtieron que los responsables de tales acciones serían encausados con arreglo a otras disposiciones legales. No se denunciaron casos de estas prácticas.

Explotación sexual de menores: Las leyes prevén penas que oscilan entre 13 y 24 años, según la edad de la víctima, por tener relaciones sexuales con menores. La edad mínima de consentimiento en las relaciones sexuales es de 18 años. El Ministerio Público informó de denuncias de agresión sexual o violación de menores que habían resultado en condenas. La Oficina contra la Trata de Personas del Ministerio Público aumentó considerablemente el número de sus investigadores y fiscales con el fin de responder a la explotación sexual de menores. La Secretaría contra la Violencia Sexual, Explotación y la Trata de Personas amplió su función a través de la celebración mensual de reuniones de coordinación interinstitucional entre partes interesadas, en cada uno de los 22 departamentos del país. Este criterio de descentralización permite hallar soluciones específicas para cada región, al mismo tiempo que se mantiene una estrategia nacional.

La ley también prohíbe la pornografía infantil y establece penas de 6 a 10 años de prisión por la producción, promoción y venta de pornografía infantil, y de 2 a 4 por su posesión. La explotación sexual de menores con fines comerciales, como el turismo sexual del que son víctima los niños, continuó siendo un problema; hubo informes fidedignos de la existencia de esta modalidad de turismo en Antigua, la Ciudad de Guatemala y el Departamento de Sololá.

La Procuraduría de los Derechos Humanos no publicó el número de casos de prostitución infantil que se tramitaron durante el año, y el Ministerio Público tampoco notificó el número de condenas impuestas por la explotación sexual de menores con fines comerciales. En 2013, el Ministerio de Trabajo informó que se había retirado a 29 menores (de 14 a 17 años) de bares y clubs nocturnos.

Niños desplazados: Elementos delincuentes y pandillas con frecuencia reclutaron a niños de la calle, muchos de ellos víctima de malos tratos en el hogar, para utilizarlos en la comisión de robos, transporte de artículos de contrabando, prostitución y otras actividades delictivas relacionadas con las drogas. Según datos facilitados por el Ministerio Público, aproximadamente 3.000 jóvenes eran miembros de pandillas callejeras. La ONG Grupo de Apoyo Mutuo informó que entre enero y septiembre se registraron en el país 47 muertes violentas de menores. Las ONG que trabajan con pandillas y otros jóvenes expresaron su preocupación por el trato abusivo, que llegó incluso a la agresión física, que recibieron jóvenes de la calle a manos de la policía después de detenerlos. A lo largo del año se registró un considerable aumento del número de niños que abandonó el país. Las encuestas señalaron la falta de oportunidades económicas y educativas en el país,

el temor a la violencia y la reunificación familiar como causas principales de la migración.

Sustracción internacional de menores: El país es signatario del Convenio de La Haya de 1980 sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores. Véase el informe del Departamento de Estado travel.state.gov/content/childabduction/english/legal/compliance.html, así como información concreta sobre Guatemala en travel.state.gov/content/childabduction/english/country/guatemala.html.

Antisemitismo

La población judía está integrada, aproximadamente, por 2.000 personas.

El 28 de agosto, miembros del grupo de judíos ultraortodoxos, Lev Tahor, abandonaron la ciudad de San Juan La Laguna, Departamento de Sololá, y se trasladaron a la Ciudad de Guatemala, a instancias de los indígenas y las autoridades, que alegaron para ello motivos de “conflicto cultural”. El grupo Lev Tahor, compuesto, aproximadamente, de 200 personas, había llegado a Guatemala procedente de Canadá, en marzo, después de dejar los Estados Unidos.

Trata de personas

Véase el informe del Departamento de Estado sobre la Trata de Personas (*Trafficking in Persons Report*) en www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/.

Personas con discapacidades

La Constitución no contiene disposiciones específicas que prohíban la discriminación por motivos de discapacidad física, sensorial, intelectual o mental, en el empleo, la educación, el acceso a servicios de salud o la prestación de otros servicios estatales. No obstante, la ley ordena la igualdad de acceso a servicios públicos y prevé algunas otras formas de protección legal. En muchos casos, las leyes no se aplicaron y el gobierno asignó escasos recursos para combatir el problema. La ley no obliga a facilitar el acceso a información o comunicaciones a las personas con discapacidad. El acceso al transporte público fue mínimo.

El Consejo Nacional para la Atención de las Personas con Discapacidad notificó que pocas personas con discapacidades asistían a centros docentes o tenían empleo. El Consejo, integrado por representantes de ministerios y organismos

gubernamentales pertinentes, es el principal órgano gubernamental encargado de proteger los derechos de las personas con discapacidades. El Consejo celebró reuniones periódicas para debatir iniciativas y contó con un presupuesto de 10,6 millones de quetzales (\$1,38 millones). No se dio a conocer qué efecto tuvo, si acaso, la gestión del Consejo en la atención de las personas con discapacidades.

Las personas con necesidades especiales dispusieron de recursos pedagógicos mínimos. La mayor parte de las universidades no contó con instalaciones accesibles a las personas con discapacidades.

El Hospital Nacional de Salud Mental Federico Mora, principal proveedor de servicios de atención médica para personas con enfermedades mentales, no tuvo suministros básicos, equipo, condiciones de vida higiénicas ni dotación suficiente de personal profesional. En 2012, la organización Disability Rights International presentó una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y documentó el maltrato que estaban recibiendo los enfermos mentales.

Posteriormente, ese mismo año, la Comisión dictaminó que los cargos eran verosímiles y ordenó la adopción de medidas preventivas para proteger a todos los pacientes, en particular las mujeres y los menores, contra la violencia física, psicológica y sexual por parte de otros pacientes, guardias y personal hospitalario. En 2013, el gobierno accedió a poner en marcha una serie de reformas y adoptar nuevas medidas de protección legales de las personas con enfermedades mentales y con discapacidades. En el caso del Hospital Federico Mora, el principal motivo de preocupación siguió siendo la seguridad, en particular, en lo que atañe a la práctica de alojar a los pacientes pendientes de procedimientos penales en los mismos pabellones que a la población general. En el curso del año, se denunciaron otros casos de enfermos aquejados de graves discapacidades mentales, psiquiátricas y físicas mezclados con la población general. Para diciembre, las organizaciones en defensa de los derechos de las personas con discapacidades señalaron que no se había registrado cambio alguno.

Pueblos indígenas

Según cálculos del Instituto Nacional de Estadística, los 22 grupos étnicos indígenas representaron el 43% del total de población. Muchos expertos creen que la cifra es considerablemente más alta. La ley prevé la igualdad de derechos de los indígenas y obliga al gobierno a reconocer, respetar y promover sus estilos de vida, costumbres, tradiciones, organizaciones sociales y atavío. Las comunidades indígenas no fueron consultadas, con carácter regular ni en debida forma, en relación con decisiones sobre la explotación de recursos energéticos, mineros,

madereros u otros recursos naturales, o no pudieron participar en ellas. Carecieron de mecanismos eficaces para dialogar con el Estado para resolver conflictos.

Las comunidades indígenas siguieron denunciando la falta de inversión pública en infraestructura en sus comunidades y el consiguiente mal estado de las carreteras y el acceso limitado a agua potable y electricidad. Las comunidades indígenas notificaron la necesidad de disponer de escuelas que impartieran educación bilingüe (es decir, en español y en su idioma nativo), estudios culturales, becas de estudio, formación de liderazgo para fomentar la participación de los indígenas en la política, y de universidades (no solo recintos adicionales), hospitales y clínicas en sus comunidades.

A los representantes indígenas les preocupó que no se hubiera consultado debidamente a las comunidades locales respecto a una serie de proyectos de desarrollo regional que reportaron beneficios desproporcionados a las empresas, los funcionarios públicos y sus asociados, al mismo tiempo que pusieron en peligro las tierras y culturas indígenas.

Los indígenas estuvieron subrepresentados en la política nacional y se mantuvieron en gran medida al margen del proceso político, económico, social y cultural del país, debido, principalmente, a escasas oportunidades educativas (en contra de las disposiciones legales), información limitada sobre sus derechos, discriminación generalizada y falta de financiación de los partidos políticos pro indígenas. Estos factores contribuyeron a crear barreras económicas que perpetuaron índices desproporcionados de pobreza entre la mayoría de las poblaciones indígenas. Si bien algunos miembros de la población indígena participaron en la política, los representantes de la sociedad civil se mostraron escépticos en cuanto a un posible efecto de dicha participación en la estructura de los partidos políticos.

Las tierras indígenas carecieron de una efectiva demarcación, lo que dificultó seriamente el reconocimiento oficial de los títulos de propiedad de la tierra. Los defensores de los derechos indígenas afirmaron que la ignorancia generalizada de las autoridades de seguridad en cuanto a las normas y prácticas indígenas dio lugar a malentendidos. El número de agentes de policía de origen indígena que prestaba servicio en sus propias comunidades étnicas o lingüísticas fue muy reducido. En 2013, la PNC inauguró dos academias de policía, que vinieron a sumarse a otras dos ya existentes en zonas del país de mayoría indígena, en un intento de aumentar el número de agentes de policía indígenas.

Más del 50% de las mujeres indígenas mayores de 15 años eran analfabetas, y un número desproporcionado de niñas indígenas no asistió a la escuela.

El Departamento de Pueblos Indígenas del Ministerio de Trabajo, encargado de investigar los casos de discriminación y representar los derechos de los indígenas, asesoró a estas personas en cuanto a sus derechos; no obstante, la escasez de recursos menoscabó la eficacia del Departamento. Los indígenas fueron especialmente vulnerables a la trata de personas con fines de explotación laboral.

El requisito legal de contar con intérpretes judiciales en los procedimientos penales rara vez se pudo cumplir por falta de estos profesionales. Ahora bien, en muchos casos, se asignó a jueces o personal judicial bilingües a lugares donde no se hablaba su idioma indígena.

Actos de violencia, discriminación y otros abusos motivados por la orientación sexual y la identidad de género

La legislación vigente contra la discriminación no se aplicó a lesbianas, gays, bisexuales y transexuales. Los grupos de apoyo a los derechos de estos individuos alegaron que miembros de la policía con frecuencia extorsionaron y acosaron a hombres y transexuales que creían que eran trabajadores sexuales. Lesbianas, gays, bisexuales y transexuales fueron objeto de discriminación social generalizada en cuanto el acceso a educación, atención de salud, empleo y vivienda. Los intentos del gobierno por remediar esta discriminación fueron mínimos.

Según informes de agrupaciones en defensa de los derechos de LGBT, los gays y los transexuales con frecuencia sufrieron malos tratos a manos de la policía. La falta de confianza en el sistema judicial y el temor al renovado acoso o la recriminación social disuadieron a las víctimas de presentar denuncias.

Estigma social del VIH/SIDA

La discriminación por causa del VIH/SIDA no está prohibida expresamente por las leyes y hubo discriminación social contra personas con VIH/SIDA.

Otras formas de violencia o discriminación social

Según la ONG Grupo de Apoyo Mutuo, turbas de vigilantes, con frecuencia en comunidades rurales indígenas, habían matado a un total de 78 personas hacia finales de agosto. Las víctimas solían ser individuos sospechosos de violación,

secuestro, robo o extorsión. Numerosos observadores atribuyeron estos actos a la frustración ante la falta de justicia y seguridad que se podía esperar de la policía y las autoridades judiciales. Este vacío de autoridad condujo a la formación de grupos de seguridad ciudadana. En muchos casos, agentes de la PNC se negaron a intervenir por temor a su propia seguridad personal.

Sección 7. Derechos de los trabajadores

a. Libertad de asociación y derecho de negociación colectiva

El derecho de los trabajadores, salvo los miembros de las fuerzas de seguridad, a organizarse y afiliarse al sindicato de su elección, declararse en huelga y negociar colectivamente está protegido por ley; aunque está sujeto a determinadas restricciones. Por ejemplo, el reconocimiento legal de un nuevo sindicato para toda una industria exige la afiliación de una mayoría del 50% más uno de los trabajadores en dicha industria y restringe la dirección del sindicato a los ciudadanos guatemaltecos. La ley prohíbe la discriminación por afiliación a un sindicato y la injerencia de los patronos en actividades sindicales; también exige la reincorporación de los trabajadores despedidos ilegalmente por organizar actividades sindicales.

Además, la organización de una huelga entraña un proceso lento y complejo. Para convocar una huelga es preciso el apoyo del 50% de los trabajadores de la empresa. El presidente y los miembros del gabinete pueden suspender cualquier huelga que consideren “gravemente perjudicial para las actividades y los servicios públicos esenciales del país”. El gobierno define los “servicios esenciales” de manera más amplia que las normas internacionales, denegando así el derecho de huelga a gran número de trabajadores públicos, como los empleados en los sectores de educación, servicios postales, transportes y producción, transporte y distribución de energía. Los empleados públicos y los trabajadores de los sectores considerados esenciales pueden dirimir sus conflictos por mediación y arbitraje a través de la Inspectoría General de Trabajo del Ministerio de Trabajo o directamente en los tribunales del trabajo.

Las represalias empresariales por la participación en huelgas legales están prohibidas por ley, pero los patronos pueden suspender o rescindir el contrato de los trabajadores por ausentarse sin permiso, si las autoridades no han reconocido la legalidad de la huelga. La ley exige el recurso al arbitraje vinculante en caso de no llegar a un acuerdo después de 30 días de negociaciones. El propietario de una fábrica o empresa no está obligado a negociar un convenio colectivo de trabajo, a

menos que el 25% de los trabajadores de la fábrica o empresa estén afiliados a un sindicato y soliciten negociaciones.

El gobierno no aplicó eficazmente la ley. Una asignación de recursos insuficiente y unos procedimientos jurídicos y administrativos ineficaces impidieron a las instituciones pertinentes del Estado investigar, enjuiciar o sancionar a los patronos que infringieron las leyes sobre libertad de asociación y negociación colectiva, o restituir en sus puestos a los trabajadores despedidos ilegalmente por su participación en actividades sindicales. Los inspectores no adoptaron medidas eficaces para obtener acceso a sitios en la web en respuesta a la negativa de los patronos a permitirles la entrada en las instalaciones para investigar las reivindicaciones de los trabajadores, ni tampoco solicitaron normalmente la asistencia de la policía, como se requiere. Las multas por infracción de las leyes laborales oscilaron entre 50 (\$6,50) y 5.000 (\$650) quetzales, pero fueron insuficientes y rara vez se impusieron.

El Ministerio de Trabajo no está facultado para imponer multas u otras sanciones a los patronos por infracciones de la ley observadas en el curso de una inspección, sino que deben remitir esos casos a un tribunal. Los patronos, con frecuencia, se negaron a acatar los fallos judiciales que favorecían a los trabajadores y los tribunales rara vez los sancionaron por incumplimiento de decisiones judiciales. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) señaló que, según informes de la judicatura, desde agosto de 2013, la Oficina del Fiscal Público había recibido 549 quejas de incumplimiento de las leyes laborales. Para septiembre, se habían presentado cargos por incumplimiento en 33 casos. Las apelaciones y el recurso generalizado de los patronos a tácticas tales como su reconstitución como nueva entidad, a menudo prolongaron los procedimientos de readmisión. La duración del proceso de readmisión de trabajadores y de otras violaciones del derecho laboral fue excesiva, con frecuencia de dos a cuatro años y, en algunas ocasiones, hasta de 10 años. Los tribunales también tropezaron con dificultades para notificar sus mandamientos cuando los patronos estaban registrados bajo direcciones incorrectas o negaban el acceso al personal judicial encargado de servir la notificación.

La Unidad Fiscal Especial de Delitos contra Sindicalistas de la Fiscalía de Derechos Humanos del Ministerio Público está encargada de investigar los ataques y las amenazas contra sindicalistas, así como el cumplimiento de las resoluciones judiciales dictadas en casos de conflictos laborales. La dotación de personal de la Unidad pasó de nueve en 2013 a 12 (un fiscal, ocho fiscales auxiliares y tres administradores). No obstante, el grado de impunidad siguió siendo elevado. Datos del Ministerio Público revelaron que la unidad obtuvo nueve condenas, a

diferencia del año anterior en que no hubo ninguna. Según la OIT, la CICIG puso de relieve varios factores que tuvieron un efecto negativo en las investigaciones, entre ellos, la falta de planificación metódica y de continuidad entre los fiscales encargados de los casos, las demoras en la investigación de casos penales y el temor de los testigos a prestar declaración.

El Ministerio del Interior administró un programa de protección extensiva, entre otros, a algunos sindicalistas. En el curso del año, el ministerio declaró que había asignado tres millones de quetzales (\$389.600) a la protección de sindicalistas. El Ministerio también informó que siete sindicalistas gozaban de cierto grado de protección y que se habían recibido otras tres solicitudes de protección. No se ofrecieron detalles concretos del tipo y la idoneidad de la protección otorgada. En agosto, el Ministerio promulgó un protocolo de implementación de medidas de seguridad inmediata y preventiva para los defensores de los derechos humanos. El Ministerio no había ultimado su proceso para analizar los riesgos de las amenazas y determinar el tipo de protección necesaria. Las agrupaciones laborales informaron que una línea de teléfono especial instalada en el ministerio en 2013, para permitir a los sindicalistas denunciar amenazas, seguía sin funcionar y que, con frecuencia, las llamadas no se transmitían a su destinatario o no se contestaban.

El gobierno adoptó algunas medidas para aplicar su hoja de ruta 2013, acordada con la OIT, que incluía la firma de un acuerdo marco para el establecimiento de un grupo de coordinación interinstitucional para agilizar e intercambiar información sobre la violencia contra trabajadores sindicados. No obstante, la OIT señaló varios sectores que requerían acción inmediata, como investigación y condena de los responsables de la violencia contra los sindicatos, adopción de medidas para la protección de oficiales y miembros de sindicatos, reformas legislativas y concienciación de la libertad de asociación y negociación colectiva. El 18 de septiembre, se reactivó efectivamente un tribunal de arbitraje establecido en virtud del Acuerdo de Libre Comercio entre la República Dominicana, Centroamérica y los Estados Unidos para tratar de la omisión gubernamental de aplicar eficazmente sus leyes laborales.

Las trabas procesales, las restricciones al establecimiento de sindicatos y la impunidad de los patronos, que se negaban a recibir o acatar órdenes judiciales, limitaron la libertad de asociación y la negociación colectiva. La violencia contra los sindicalistas y los activistas continuaron siendo problemas graves. Varios dirigentes laborales fueron asesinados o denunciaron amenazas de muerte y otros actos de intimidación. Por ejemplo, en enero, Marlon Dagoberto Vásquez López, miembro del sindicato de la construcción y los servicios, fue asesinado.

Continuaron los informes de acoso o amenazas por parte de los patronos o elementos contratados por ellos contra los trabajadores que no aceptaban el despido o se negaban a renunciar a su derecho a la reincorporación.

Las autoridades no llevaron a cabo una investigación exhaustiva de los actos de violencia y las amenazas, que no llegaron a los tribunales, lo cual dificultó frecuentemente identificar los motivos de los asesinatos. Los sindicatos locales continuaron instando a las autoridades a investigar los asesinatos de sindicalistas y pidiendo medidas de seguridad más eficaces para proteger a dirigentes y miembros de sindicatos. El Ministerio Público informó que estaba investigando los casos de cinco miembros de sindicatos asesinados durante el año: William Leonel Retana Carías, Manuel de Jesús Ortiz Jiménez, Gerardo de Jesús Carrillo Navas, Gabriel Enrique Ciramagua Ruiz y Joaquín Chiroy Chiroy.

Los patronos se resistieron sistemáticamente a las tentativas de formación de sindicatos, demoraron el cumplimiento de los acuerdos laborales o los aplicaron solo parcialmente, y no acataron los mandamientos judiciales que les exigían negociar con los sindicatos reconocidos. Entre los informes fidedignos recibidos de represalias patronales contra los trabajadores que intentaron ejercer sus derechos, cabe destacar numerosas denuncias presentadas ante el Ministerio de Trabajo y el Ministerio Público de represalias patronales a causa de actividades sindicales. Las prácticas más comunes de represalia fueron el despido y acoso de los trabajadores que intentaban formar sindicatos en el lugar de trabajo, la organización de sindicatos ilegales respaldados por la empresa para contrarrestar la acción de los sindicatos legalmente establecidos, la inclusión de los organizadores de sindicatos en listas negras y las amenazas de cierre de la fábrica. Los patronos amenazaron con no renovar el contrato ni ofrecer empleo permanente a los trabajadores subcontratados que se afiliaban a un sindicato o se negaban a desafiliarse.

Con frecuencia, los patronos no cumplieron las órdenes de reincorporación de los trabajadores. En algunos casos, los trabajadores readmitidos no fueron restituidos a sus antiguos puestos, ni percibieron los salarios atrasados que se les adeudaban. Los patronos, a veces con impunidad, no pagaron a los trabajadores la cantidad íntegra legalmente estipulada ni las multas ordenadas por los tribunales. Los sindicatos locales denunciaron el continuo recurso de las empresas a declaraciones de quiebra fraudulenta, sustitución de titularidad y reincorporación de empresas, con el fin de eludir la obligación legal de reconocer a los nuevos sindicatos, pese a las restricciones legales a tales recursos.

Siguió activo el movimiento impulsado por las “asociaciones solidaristas”.

Si bien la ley prevé el derecho exclusivo de los sindicatos a negociar las condiciones laborales en nombre de los trabajadores, los sindicatos continuaron afirmando que la gerencia promovió las asociaciones solidaristas para disuadir el establecimiento de sindicatos o competir con los sindicatos existentes.

b. Prohibición del trabajo forzoso u obligatorio

La ley prohíbe toda forma de trabajo forzoso u obligatorio. En algunos casos, el gobierno no hizo efectivo el cumplimiento de estas leyes. Las sanciones administrativas, que oscilaron entre 50 quetzales (\$6,50) y 5.000 quetzales (\$650), fueron insuficientes y rara vez se aplicaron. Las sanciones penales por trabajo forzoso fluctuaron entre 8 y 18 años de prisión. El gobierno no tuvo suficientes recursos (inspectores laborales, vehículos y equipo) para hacer inspecciones regulares eficaces ni procurar la reparación en casos de trabajo forzoso. El gobierno contó con agentes de policía y fiscales especializados para tramitar casos de trata de personas, incluso de trabajos forzosos, pero no se dictó ninguna condena por trabajos forzosos.

Se siguieron recibiendo informes de casos en que, tanto hombres, como mujeres, habían sido sometidos a trabajos forzosos en la agricultura y el servicio doméstico. También se denunciaron casos de trabajo infantil forzoso (véase la sección 7.c.).

Véase también el Informe del Departamento de Estado sobre la Trata de personas (*Trafficking in Persons Report*) en www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/.

c. Prohibición del trabajo infantil y edad mínima para trabajar

La ley prohíbe el trabajo de menores de 14 años, aunque autoriza al Ministerio de Trabajo a conceder exenciones a esta regla en casos excepcionales. La Inspección General de Trabajo informó que no había concedido ninguna exención durante el año. Se prohíbe a los menores de 18 años trabajar en lugares donde se sirvan bebidas alcohólicas, en condiciones insalubres o peligrosas, en turnos de noche o hacer horas extraordinarias. La jornada laboral legal de los menores de 14 años es de seis horas; la de los menores de 14 a 17 años, de siete horas.

La Unidad de Protección al Menor Trabajador, del Ministerio de Trabajo, está encargada de asegurar el cumplimiento de las restricciones al trabajo infantil y dar a conocer a los menores, a sus padres y a los patronos los derechos de los menores en el mercado laboral. Las sanciones fluctuaron entre 50 quetzales (\$6,30) y 5.000 quetzales (\$630); el gobierno no aplicó eficazmente estas leyes y la situación se

agravó por la deficiencia de los sistemas de inspección laboral y judicial. El Gobierno no asignó recursos suficientes a los programas de prevención.

El trabajo infantil fue un problema generalizado. Según cálculos de la ONG Asociación Proyecto Conrado de la Cruz, la población activa incluía, aproximadamente, un millón de niños de 5 a 17 años. La mayor parte del trabajo infantil se concentró en las zonas rurales indígenas. El sector agrícola y el sector no estructurado emplearon habitualmente a menores de 14 años, con frecuencia en pequeñas empresas familiares, como el cultivo de brócoli, café y maíz y la fabricación de fuegos artificiales, grava y azúcar. Los niños indígenas también trabajaron como vendedores ambulantes, limpiabotas y ayudantes de albañilería. Se presentaron algunas pruebas limitadas de trabajo infantil en la producción de caucho y madera. Algunos niños trabajaron un promedio de 45 horas semanales.

Cerca de 39.000 menores, en su mayoría niñas indígenas, trabajaron en el servicio doméstico y con frecuencia estuvieron expuestos a malos tratos físicos y abusos sexuales. En la zona fronteriza con México, se presentaron denuncias de trabajo infantil forzado en basureros municipales y en las calles, como mendigos.

Véase también el informe del Departamento de Trabajo sobre las peores formas de trabajo infantil (*Findings on the Worst Forms of Child Labor*), en www.dol.gov/ilab/reports/child-labor/findings/.

d. Discriminación en el empleo o la ocupación

La ley prohíbe explícitamente la discriminación en el empleo o la ocupación por motivo de raza, sexo, religión o discapacidad. El gobierno no aplicó efectivamente las leyes y reglamentos pertinentes. La ley no prohíbe explícitamente discriminar en el empleo por motivos de idioma, orientación sexual o identidad de género, condición de VIH positivo u otras enfermedades transmisibles, o condición social.

Se registraron casos de discriminación en el empleo o la ocupación. En las zonas rurales fue frecuente la discriminación salarial por motivos de raza y sexo.

e. Condiciones de trabajo aceptables

La ley establece normas de salario mínimo en los sectores agrario, no agrario y las fábricas de confección de ropa de vestir. El salario mínimo estaba fijado en 74,97 quetzales (\$9,75) diarios para los trabajos agrícolas y no agrícolas y en 68,91 quetzales (\$8,95) para el trabajo en las fábricas establecidas en zonas francas. Los

trabajadores que solo perciben un salario mínimo también tienen derecho a una bonificación mensual obligatoria de 250 quetzales (\$31,50), y los trabajadores asalariados reciben dos bonificaciones anuales obligatorias (de Navidad y del “14° mes”), cada una equivalente al salario mensual. El Instituto Nacional de Estadística calculó el presupuesto mensual mínimo destinado a la alimentación de una familia de cinco personas en 3,123 quetzales (\$406). La cesta de la compra básica, incluidos alimentos y vivienda, era de 5.700 quetzales (\$740).

La semana laboral legal es de 48 horas, con un descanso mínimo remunerado de 24 horas. La jornada laboral no debe exceder de 12 horas diarias (incluidas las horas extraordinarias). La ley prevé, asimismo, 12 días feriados anuales remunerados y 15 días de vacaciones remunerados después de un año de trabajo. Los límites máximos establecidos para la jornada y la semana laborales no se aplican a los trabajadores del servicio doméstico. Los trabajadores del sector formal reciben la remuneración estándar por jornada de trabajo por los feriados anuales oficiales. Es obligatorio el pago de tiempo y medio por horas extraordinarias de trabajo y se prohíbe obligar a trabajar un número excesivo de horas extraordinarias.

Las normas de salud y seguridad en el trabajo, establecidas por el gobierno, eran inadecuadas, no estaban actualizadas para todas las industrias y no se aplicaron de manera sistemática. La ley no prevé el derecho de los trabajadores a rehuir situaciones que pongan en peligro la salud o la seguridad sin arriesgar su empleo.

El Ministerio de Trabajo realizó inspecciones destinadas a vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales sobre salario mínimo, pero los inadecuados recursos asignados por el gobierno no permitieron a los inspectores aplicar la ley, en particular, en los sectores agrario y no estructurado. En 2013, último año para el que se dispone de datos, el Ministerio empleó aproximadamente a 300 inspectores laborales, aunque muchos de ellos desempeñaron funciones conciliatorias o administrativas en vez de funciones de inspección claramente definidas.

Los inspectores laborales declararon haber descubierto numerosos casos de infracciones de las disposiciones vigentes sobre horas extraordinarias, pero la ineficacia de los tribunales laborales, la insuficiencia de las multas impuestas por dichos tribunales y la negativa de los patronos a permitir el acceso de los inspectores a las instalaciones o a las nóminas u otros documentos, junto con la falta de insistencia de los inspectores frente a tales negativas, comprometieron seriamente el cumplimiento efectivo de la legislación. Los inspectores laborales no estaban facultados para imponer sanciones a los patronos, sino que tenían que someter las presuntas infracciones a la atención de los tribunales laborales donde,

con frecuencia, las actuaciones procesales ineficaces y lentas demoraron la resolución de los casos (en muchos casos durante años). Asimismo, la cuantía de las multas, que osciló entre 50 quetzales (\$6,49) y 5.000 quetzales (\$649), era insuficiente para disuadir las infracciones. Las autoridades con frecuencia no investigaron a fondo ni atribuyeron responsabilidades por negligencia y rara vez sancionaron a los patronos por no proveer un entorno laboral seguro. Las disposiciones legales que obligan a las empresas con más de 50 empleados a disponer de servicios médicos *in situ* para sus trabajadores no se aplicaron.

El Ministerio de Trabajo mantuvo una centralita telefónica para atender solicitudes de información o asesoramiento y registrar denuncias de violaciones de la legislación laboral. Las denuncias se enviaron a inspectores y tribunales laborales competentes para su tramitación ulterior.

Dirigentes laborales y agrupaciones de derechos humanos informaron que los patronos exigieron a los trabajadores trabajar horas extraordinarias sin abonarles el pago extra que exige la ley. La gerencia solía manipular el servicio de transportes al lugar de trabajo que prestaba a los empleados, para obligarlos a trabajar horas extraordinarias, en particular en las zonas francas industriales situadas en lugares aislados, con escasas opciones de transporte. El incumplimiento de las disposiciones sobre salario mínimo en los sectores agrícola y no estructurado fue generalizado. Según informaron grupos de apoyo, más de la mitad de los trabajadores de zonas rurales con empleos de jornada completa no recibieron los salarios, las prestaciones o las asignaciones de seguridad social a que les daba derecho la ley. Se denunciaron casos de patronos del sector agrario que condicionaban el pago del salario mínimo al logro de objetivos de producción excesivos, que los trabajadores generalmente no podían cumplir. Las estadísticas oficiales indican que un 69% de la fuerza laboral continuó trabajando en el sector no estructurado y al margen de las protecciones básicas que otorga la ley.

Los sindicatos locales siguieron recalando y protestando con respecto a las violaciones cometidas por los patronos que no pagaban al servicio nacional de seguridad social ni las cotizaciones que les correspondían a ellos ni las de los trabajadores, a pesar de haber deducido dichas cotizaciones del sueldo de los empleados. Esas violaciones, especialmente comunes en el sector privado y las industrias de la exportación, tuvieron por resultado limitar o denegar el acceso de los empleados al servicio de salud pública y reducir las prestaciones por concepto de pensiones de los trabajadores durante sus años de jubilación.